

Este Ministerio, de conformidad con el dictamen emitido por la Asesoría Jurídica y a propuesta de la Dirección General de Pesca Marítima, previa declaración de caducidad de la concesión anterior en el polígono de Caramiñal «H», cuadrícula número 24, otorgada por Orden ministerial de 14 de abril de 1965 («Boletín Oficial del Estado» número 119), y considerando que este otorgamiento no significa aumento de concesiones para cultivo de mejillones, por lo que no resulta afectado por la prohibición establecida en la Orden ministerial de 31 de mayo de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 223), prorrogada por Orden ministerial de 30 de agosto de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 221), ha tenido a bien decretar la caducidad de la concesión anterior y otorgar la nueva solicitada, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—La concesión se otorga en precario por el plazo de diez años, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo ser prorrogada a petición del interesado y podrá ser caducada en los casos previstos en el artículo 10 del Reglamento para su explotación, previa formación del expediente al efecto.

Segunda.—El sistema de flotación del artefacto que se pretende trasladar, queda confirmado con todas sus características antes autorizadas, para su nuevo emplazamiento. El cambio deberá quedar ejecutado en el plazo máximo de un año, con las debidas garantías de seguridad y será fondeado precisamente en el emplazamiento que se indica en el preámbulo de esta Orden.

Tercera.—El Ministerio de Transportes y Comunicaciones podrá cancelar esta concesión por causa de utilidad pública, sin que el titular de la misma tenga derecho a indemnización alguna.

Cuarta.—El concesionario queda obligado a observar cuantos preceptos determinan los Decretos de 30 de noviembre de 1961 («Boletín Oficial del Estado» número 304) y 23 de julio de 1964 («Boletín Oficial del Estado» número 198), así como cuantas disposiciones relacionadas con esta industria se encuentren vigentes.

Quinta.—El concesionario deberá justificar el abono a la Hacienda Pública del impuesto que grave las concesiones y autorizaciones administrativas (Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) o acreditar la declaración de no sujeto el acto a tal impuesto, hecha por la Delegación de Hacienda u Oficina Liquidadora correspondiente.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a VV. II. muchos años.  
Madrid, 26 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Pesca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Alderoso Sandberg.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante y Director general de Pesca Marítima.

**17823** ORDEN de 26 de junio de 1980 por la que se autoriza el traslado de un vivero de mejillón a favor de don Juan Bautista Suárez Torrado.

Ilmos. Sres.: Vistas las peticiones formuladas por don Juan Bautista Suárez Torrado, en las que solicita se le otorgue nueva concesión para instalar en la cuadrícula número 93 del polígono «Riveira B» el vivero de cultivo de mejillón a denominar «S. T. V. número 2», con renuncia simultánea de la concesión que tiene otorgada por Orden ministerial de 25 de noviembre de 1964 («Boletín Oficial del Estado» número 294), para el mismo vivero, de igual cultivo, en el polígono de «Caramiñal H» cuadrícula número 19.

Este Ministerio, de conformidad con el dictamen emitido por la Asesoría Jurídica y a propuesta de la Dirección General de Pesca Marítima, previa declaración de caducidad de la concesión anterior en el polígono de «Caramiñal H» cuadrícula número 19, otorgada por Orden ministerial de 25 de noviembre de 1964 («Boletín Oficial del Estado» número 294), y considerando que este otorgamiento no significa aumento de concesiones para cultivo de mejillones, por lo que no resulta afectado por la prohibición establecida en la Orden ministerial de 31 de mayo de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 223), prorrogada por Orden ministerial de 30 de agosto de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 221), ha tenido a bien decretar la caducidad de la concesión anterior y otorgar la nueva solicitada, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—La concesión se otorga en precario, por el plazo de diez años, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo ser prorrogada a petición del interesado y podrá ser caducada en los casos previstos en el artículo 10 del Reglamento para su explotación, previa formación del expediente al efecto.

Segunda.—El sistema de flotación del artefacto que se pretende trasladar queda confirmado, con todas sus características antes autorizadas, para su nuevo emplazamiento. El cambio deberá quedar ejecutado en el plazo máximo de un año, con las debidas garantías de seguridad, y será fondeado precisamente en el emplazamiento que se indica en el preámbulo de esta Orden.

Tercera.—el Ministerio de Transportes y Comunicaciones podrá cancelar esta concesión por causa de utilidad pública, sin

que el titular de la misma tenga derecho a indemnización alguna.

Cuarta.—El concesionario queda obligado a observar cuantos preceptos determinan los Decretos de 30 de noviembre de 1961 («Boletín Oficial del Estado» número 304) y 23 de julio de 1964 («Boletín Oficial del Estado» número 198), así como cuantas disposiciones relacionadas con esta industria se encuentren vigentes.

Quinta.—El concesionario deberá justificar el abono a la Hacienda Pública del impuesto que grave las concesiones y autorizaciones administrativas (Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), o acreditar la declaración de no sujeto el acto a tal impuesto, hecha por la Delegación de Hacienda u Oficina Liquidadora correspondiente.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a VV. II. muchos años.  
Madrid, 26 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Pesca y Marina Mercante, Miguel Ignacio de Alderoso Sandberg.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Marina Mercante y Director general de Pesca Marítima.

**17824** RESOLUCION de 20 de junio de 1980, de la Dirección General de Transportes Terrestres, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Reocín y Valles. (E-159/78.)

El ilustrísimo señor Director general de Transportes Terrestres, en uso de facultades delegadas por Orden ministerial de 5 de julio de 1977, con fecha 20 de junio de 1980, ha resuelto otorgar definitivamente a don Ramón Palomera Tejera la concesión del citado servicio como prolongación del ya establecido entre Reocín y Torrelavega (V-1.046), provincia de Santander, con arreglo a la Ley y Reglamento de Ordenación de Transportes vigente y, entre otras, a las siguientes condiciones particulares:

Itinerario: Longitud, 3 kilómetros Reocín y Vallés, se realizará sin paradas fijas intermedias.

Expediciones: Cinco de ida y vuelta los días laborables y cuatro de ida y vuelta los días festivos.

Tarifas: Las mismas del servicio-base V-1.046.

Clasificación respecto al ferrocarril: Afluente b) en conjunto con el servicio-base V-1.046.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Director general, Pedro González-Haba González.

**17825** RESOLUCION de 20 de junio de 1980, de la Dirección General de Transportes Terrestres, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Barago y Potes. (E-160/78.)

El ilustrísimo señor Director general de Transportes Terrestres, en uso de facultades delegadas por Orden ministerial de 5 de julio de 1977, con fecha 20 de junio de 1980, ha resuelto otorgar definitivamente a don Ramón Palomera Tejera la concesión del citado servicio como prolongación del ya establecido entre Potes y Valdeprado (V-1.155), provincia de Santander, con arreglo a la Ley y Reglamento de Ordenación de Transportes vigente y, entre otras, a las siguientes condiciones particulares:

Itinerario: Longitud, 12 kilómetros Bárago, Soberado, La Vega de Liébana y Potes.

Expediciones: Una de ida y vuelta los lunes y días 29 y 30 de junio y 12 y 13 de octubre y 1, 2 y 3 de noviembre.

Tarifas: Las mismas del servicio-base V-1.155.

Clasificación respecto al ferrocarril: Independiente en conjunto con el servicio-base V-1.155.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Director general, Pedro González-Haba González.

**17826** RESOLUCION de 20 de junio de 1980, de la Dirección General de Transportes Terrestres, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Fuente Dé y Santo Toribio de Liébana con entrada a Pombes (E-144/78).

El ilustrísimo señor Director general de Transportes Terrestres, en uso de facultades delegadas por Orden ministerial de 5 de julio de 1977, con fecha 20 de junio de 1980, ha resuelto otorgar definitivamente a don Gilberto Casado Palantino, la concesión del citado servicio público regular de transporte de

viajeros por carretera entre Fuente Dé y Santo Toribio de Liébana con entrada a Pombes, con arreglo a la Ley y Reglamento de Ordenación de Transportes vigente y, entre otras, a las siguientes condiciones particulares:

Itinerario: Longitud, 31 kilómetros Fuente Dé, Espinama, Los Ilces, Cosgaya, Enterría, Pombes, Los Llanos, Camaleño, Baró, Turieno, Potes y Santo Toribio de Liébana.

Expediciones: Dos diarias de ida y vuelta.

Tarifas: Clase única a 2,387 pesetas viajero-kilómetro. Exceso de equipajes, encargos y paquetería a 0,350 pesetas por cada 10 kilogramos-kilómetro o fracción. Sobre las tarifas de viajero-kilómetro, se percibirá del usuario el Seguro Obligatorio de Viajeros.

Clasificación respecto al ferrocarril: Independiente.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Director general, Pedro González-Haba González.

**17827** RESOLUCION de 9 de julio de 1980, de la Dirección General de Transportes Terrestres, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Riaño y Oviedo. (E-287/79.)

El ilustrísimo señor Director general de Transportes Terrestres, en uso de facultades delegadas por Orden ministerial de 5 de julio de 1977, con fecha 9 de julio de 1980, ha resuelto otorgar definitivamente a «El Carbonero, S. A.», la concesión del citado servicio, como hijuela-desviación del ya establecido entre La Foz de Caso y Oviedo (V-1.617) con arreglo a las Leyes y Reglamentos de Ordenación y Coordinación de Transportes vigentes y, entre otras, a las siguientes condiciones particulares:

Itinerario: Longitud, 17,7 kilómetros, Riaño y Oviedo, se realizará sin paradas fijas intermedias.

Prohibiciones de tráfico: De y entre Oviedo y el punto situado a 250 metros del cruce de la C-635 y la carretera nueva, situado en la carretera nueva en dirección a San Miguel.

Expediciones: Se realizarán las siguientes expediciones: Entre el 15 de octubre y el 15 de junio, treinta y dos de ida y vuelta los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y dieciséis de ida y vuelta los sábados.

Tarifas: Las mismas del servicio-base V-1.617.

Clasificación del servicio respecto del ferrocarril: Coincidente b) en conjunto con el servicio-base V-1.617.

Madrid, 9 de julio de 1980.—El Director general, Pedro González-Haba González.

## MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

**17828** ORDEN de 13 de junio de 1980 por la que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Sevilla en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Industrias Eléctrico Marítimas, Sociedad Anónima». (INEMA).

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme de la Audiencia Territorial de Sevilla, con fecha 15 de diciembre de 1979, en el recurso contencioso-administrativo número 371/78, interpuesto por «Industrias Eléctrico Marítimas, S. A.» (INEMA), contra este Departamento, sobre acta de liquidación número 1275/77,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Jacinto García Sainz en nombre y representación de «Industrias Eléctrico Marítimas, S. A.», contra los acuerdos de la Dirección General de Prestaciones del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de dos de marzo de mil novecientos setenta y ocho los que debemos de confirmar y confirmamos por ser conformes con el ordenamiento jurídico. Sin costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, y en virtud de las atribuciones delegadas a esta Subsecretaría por Orden del excelentísimo señor Ministro de 2 de marzo de 1979, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1958.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 13 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario del Departamento, Eloy Ybáñez Bueno.

Ilmo Sr. Director general de Régimen Jurídico de la Seguridad Social.

**17829**

ORDEN de 13 de junio de 1980 por la que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Antracitas de Noriega, Sociedad Limitada».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme de la Audiencia Territorial de Valladolid, con fecha 6 de mayo de 1974, en el recurso contencioso-administrativo número 103/73, interpuesto por «Antracitas de Noriega, S. L.», contra este Departamento sobre cuotas de la Seguridad Social.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Declaramos la nulidad del acta originaria formalizada por la Inspección de Trabajo de León, número mil sesenta y cinco de mil novecientos setenta, de veinticinco de enero de mil novecientos setenta y dos, a que este recurso se refiere, por no hallarse ajustada a derecho la extensión de la misma; sin hacer expresa condena en costas a ninguna de las partes.»

Asimismo certifico que contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, quien con fecha 23 de mayo de 1979, dictó la siguiente resolución:

«Fallamos: Que con revocación de la sentencia apelada y desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto a nombre de «Antracitas Noriega, S. L.», contra la Resolución del Ministerio de Trabajo en su Dirección General de la Seguridad Social de fecha veinte de abril de mil novecientos setenta y dos que en alzada confirmó otra de la Delegación Provincial de Trabajo de León, de veinticinco de enero de mil novecientos setenta y uno, a su vez confirmatoria de acta de liquidación de descubiertos de cotización para Seguridad Social número mil sesenta y cinco de mil novecientos setenta, levantada a aquella Empresa el treinta de septiembre del referido año por la Inspección Provincial de Trabajo, debemos declarar y declaramos válidas y subsistentes las expresadas Resoluciones administrativas, por ser conformes con el ordenamiento jurídico; así como absolvemos a la Administración Pública de cuantos pedimentos contiene la demanda; sin especial imposición de costas procesales en ambas instancias.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, y en virtud de las atribuciones delegadas a esta Subsecretaría por Orden del excelentísimo señor Ministro de 2 de marzo de 1979, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1958.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 13 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy Ybáñez Bueno.

Ilmo. Sr. Director general de Régimen Jurídico de la Seguridad Social.

**17830**

ORDEN de 18 de junio de 1980 por la que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valladolid, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por «Viloria Hermanos, Sociedad Anónima».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme de la Audiencia Territorial de Valladolid, con fecha 9 de diciembre de 1974, en el recurso contencioso-administrativo número 319/1973, interpuesto por «Viloria Hermanos, S. A.», contra este Departamento, sobre acta de liquidación,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de «Viloria Hermanos, S. A.», contra las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Social de cinco de octubre de mil novecientos setenta y tres, desestimatoria del recurso de alzada deducido contra la del Delegado provincial de Trabajo de León de veintiséis de septiembre de mil novecientos setenta y dos, debemos declarar y declaramos la nulidad de ambos actos administrativos y del acta que confirman única y exclusivamente en cuanto a la cuantía de la base especial sobre la que deberá ser girado el cinco por ciento para el complemento de compensación del Régimen Especial de la Minería del Carbón, manteniendo los demás pronunciamientos por su conformidad con el ordenamiento jurídico, y ordenamos se practique una nueva liquidación que tenga en cuenta los criterios establecidos en el cuarto considerando de esta sentencia, con devolución, en su caso, de lo indebidamente ingresado, todo ello sin hacer expresa condena en costas.»

Asimismo, certifico que contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, quien, con fecha de 2 de enero de 1980, dictó la siguiente resolución: